

Formalizar la economía informal

Existe una manera de capitalizar a la población pobre de Venezuela, mediante la formalización de sus viviendas y negocios informales, proporcionándole así muchos miles de millones de dólares en términos de poder adquisitivo, crédito, seguros, seguridad y dignidad. Esto no es una exageración. Para lograrlo no se requieren leyes habilitantes ni mucho dinero, pero sí hace falta un fuerte compromiso político para eliminar la corrupción oficial y un celo revolucionario para cambiar el sistema desde su raíz, vale decir, los incentivos del sistema

No es un cuento de hadas, sino algo que ya se está logrando en otros lugares. Y funciona. El ganador del Premio Nobel, Ronald Coase, dice que es “totalmente convincente”; Francis Fukuyama lo califica de “revolución en el Tercer Mundo”; Walter Winston, de Citibank, opina que es de “primera clase”; Margaret Thatcher apunta que se trata de “una revolución nueva y tremendamente provechosa”; Jeanne Kilpatrick dice que es algo “precursor y altamente original”; y Javier Pérez de Cuéllar acota que es “un cambio que funciona igual en todas partes del mundo”. ¿De qué se trata? ¿Acaso de algún nuevo orden económico? No, no es un modelo nuevo, sino todo lo contrario. Es el mismo viejo patrón que ha hecho progresar al mundo puesto a trabajar en pro de la clase desposeída y cuyos resultados han sido documentados por el economista peruano Fernando de Soto. Es capitalismo para los pobres.

Responda esta pregunta: si un buhonero venezolano que ocupase un rancho en un barrio fuese propietario de su casa y constituyera legalmente su negocio, ¿cuánto capital, crédito y valor tendría entonces a su disposición? La respuesta ha sido investigada exhaustivamente y resulta verdaderamente asombrosa: tendría una situación de 10 a 20 veces mejor que la actual, muchísimo más segura y pagando menos sobornos. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué el sector “informal” venezolano ha pasado de una tercera parte de la población a muy por encima de la mitad a lo largo de los últimos 20 años? ¿Por qué está creciendo con tanta rapidez la economía informal?

La población pobre es poseedora de miles de millones de dólares de “capital muerto” en sus propiedades y negocios porque los mismos no han sido formalizados. La formalización implica hipotecas para las viviendas, responsabilidad limitada para las empresas, seguros contra pérdidas, crédito en los bancos y, sí, también impuestos. Pero la evasión tributaria no es el motivo fundamental de la existencia de la economía informal. La razón principal reside en las políticas gubernamentales.

Los pobres ya están pagando, de hecho, muchos impuestos ocultos. En un mundo de compras al contado, deben cargar consigo en todo momento su mercancía, su tienda y su dinero y, por lo tanto, tienen muy poca seguridad, si acaso, y todo ello a un precio muy elevado. Las triquiñuelas proteccionistas abundan. Los sobornos no acaban nunca. Cuando algo sale mal, bien sea por robo, homicidio, soborno o fraude, prácticamente no tienen amparo legal alguno. De hecho, cuando llegan las autoridades, generalmente es para pedir más sobornos, empeorando las cosas. Cuando la propiedad no está protegida por ley, la gente vive en la jungla y hace lo que tenga que hacer para sobrevivir.

Pese a ello, los barrios vibran con vida, inversión y construcción y los buhoneros se multiplican cada día. Los pobres mejoran sus viviendas, toman “prestada” electricidad de algún habitante aledaño, le van dando una mayor permanencia a las cosas y solidifican los lazos con los vecinos. Los buhoneros también figuran entre los empresarios más capaces de Venezuela. Viven cada día en un mundo nuevo e incierto. Corren riesgos como muy pocos multimillonarios en cualquier parte del mundo jamás lo han hecho. Son independientes, ingeniosos, audaces y activos. Y es que tienen que serlo para sobrevivir. Sin embargo, están en un juego que nunca llegan a ganar. El sistema tiene todas las probabilidades en su contra.

Los productos del buhonero no están garantizados por el fabricante ni por el distribuidor. El comerciante y sus clientes viven en un territorio donde la única regla válida es “comprador, vela por tus propios intereses”. Y ¿por qué los precios son quizá un poco más bajos que en los comercios formales? Porque los productos son robados, o importados ilegalmente, o son falsos, o no se contabilizan. En cuanto a sus ranchos en los barrios, buena parte de las mejoras no reconocidas tienen que ver con la seguridad. Los barrios muy a menudo son lugares sin ley donde la gente roba, saquea y mata a un ritmo que crece con alarmante celeridad, y donde la única defensa es la solidaridad con el vecino o parientes que puedan acudir en auxilio. Por supuesto que nadie que viva en una urbanización cerrada de clase media de Caracas tiene ni la más remota idea de lo que significa vivir todo el tiempo con esa clase de inseguridad absoluta.

Entonces, ¿por qué los pobres eligen vivir de esa manera? No es su elección. El sistema está construido de tal manera que les haga imposible disfrutar del capitalismo verdadero: los frutos del trabajo, el pensamiento y la creación de riqueza. Los pobres no eligen nada; están sujetos a las decisiones de las autoridades, y el sistema creado por las autoridades venezolanas desde el comienzo está fundamentalmente parcializado en contra de los pobres “sin conexiones”. Las instituciones de la equidad, la ley y la justicia no existen para ellos. El sistema que opera hoy día en Venezuela no se diferencia del que ha tenido el país desde hace décadas: el impuesto por los poderosos para controlar a los desposeídos todavía sigue vigente.

Los poderosos ofrecen incentivos para que los desposeídos vivan en un mundo sin ley, sin propiedad, de compras al contado, inseguro y lleno de sobornos. ¿A santo de qué cabría imaginarse que sea de otro modo, cuando durante años muy pocos se han vuelto muy ricos mientras que 80% se ha hundido en la pobreza, bajo el régimen de que “éste es un país rico, ya te llegará la hora, búscate los contactos políticos correctos y ten suerte”?

Lo que los pobres necesitan no es suerte ni limosnas, sino capitalismo, títulos de propiedad, seguros, crédito, constitución legal, acceso formal e imparcial a los tribunales de justicia y cuerpos de seguridad. Ese acceso se puede lograr, en parte, mediante dos reformas: otorgando títulos de propiedad y constituyendo empresas legalmente. Por la vía de las exoneraciones, moratorias o condonaciones tributarias —todas ellas utilizadas en la economía formal— el gobierno puede hacer que los desposeídos sean gente de provecho con su propia riqueza. Si cabe razonablemente hacer comparaciones con una investigación realizada en Perú, los pobres en Venezuela pueden poseer hasta \$100.000 millones en “capital muerto”, lo que equivale a un año de Producto Interno Bruto (PIB) y más de cinco veces el total de reservas internacionales del país. ¿De qué manera se le puede dar vida a ese capital?

Formalizar la vivienda y los negocios ambulantes de los buhoneros es una tarea tediosa, pero no abrumadora. Deben levantarse planos de los barrios y una fuente confiable debe elaborar un censo de la propiedad y de las necesidades de sus habitantes. Los vendedores de la calle necesitan protección legal. Hay que llevar a cabo un padrón honesto de los negocios. Donde sea posible, el gobierno debe facilitar la expedición de títulos de propiedad y la constitución de empresas, no impedir las. Las industrias bancaria, aseguradora e inmobiliaria deben integrarse en el proceso, no como enemigas sino como socios. Estos son esencialmente procesos de tecnología de la información y voluntad política. Es preciso agilizar las burocracias. Los procesos de transacciones deben ser despolitizados. El papel del gobierno es liberar a la gente para que ésta cree su propia riqueza, no cargarla con normativas onerosas que inhiben la libertad y el impulso empresarial.

El sector privado necesita trabajar conjuntamente con el gobierno, de manera que los criterios finales para la obtención de seguros, hipotecas y créditos resulten alcanzables. Sin embargo, los obstáculos más difíciles no están en esas industrias, sino en un gobierno que ha diseñado el sistema de manera tal que sólo los poderosos puedan tener éxito. Eso se aplica igualmente a gobiernos anteriores como al actual, independientemente de sus intenciones. A los sistemas no los manejan las intenciones, sino los incentivos, y estos siguen obrando a favor de los ricos y poderosos y en contra de los pobres y desposeídos. Para los pobres, la “revolución” todavía no ha comenzado.

¿Cuán difícil resulta constituir una compañía u obtener el título de propiedad de una vivienda? La respuesta para un buhonero que vive en un barrio es: casi imposible. En los países latinos, algunos de esos sencillos procedimientos requieren montañas de papeleo, docenas de organismos oficiales, años de espera y unos bolsillos bien grandes para sufragar el costo de abogados, gestores y corrupción burocrática. Las burocracias emplean el papeleo y años de demoras interminables como medio para obtener ingresos ilegales. Esos obstáculos a la formalización son similares pero, de hecho, más poderosos que los aguaceros que barrieron a miles de personas y viviendas en el estado Vargas arrastrándolas hacia el mar. Los incentivos burocráticos para no hacer nada son el mayor enemigo de los pobres.

No es fácil cambiar el sistema. Por ejemplo, una compañía mundial de informática le ofreció al gobierno de Caldera la oportunidad de agilizar eficazmente la distribución de \$3.000 millones a los pobres a través de 17 programas de la Agenda Venezuela, pero éste no actuó. Como consecuencia, menos de \$1.000 millones de los fondos destinados a los desposeídos llegaron a la gente a la que debía llegar y más de \$2.000 millones fueron succionados por administradores, gobiernos, contratistas e intermediarios. El otro plan, el propuesto por la compañía de informática, le habría proporcionado a cada pobre una “tarjeta inteligente” que hubiera permitido depurar el sistema de transacciones y hacer llegar eficazmente \$2.700 millones (90%) a los necesitados, a un costo administrativo de \$300 millones (10%). ¿Tremenda diferencia, no?

Pero eso nunca se llegó a dar. El motivo tuvo que ver con los incentivos, la gente y la ley. Los incentivos del sistema, que independientemente de la nueva Constitución son ahora los mismos que cuando el gobierno de Caldera, fueron

sostener a tantos burócratas y obstáculos en el sistema de transacción como fuese posible imaginarse. Esta es la manera en que Venezuela ha estado organizada desde que se descubrió petróleo: "comencemos con el dinero del petróleo y provoquemos tanto caos en el sistema de distribución y transacción como pueda tolerarse, y al diablo con el resultado final para la llamada población objetivo". La política está en el medio de todo, incluso en el mismo sistema dispendioso de transacciones. Cuando varios ministros de Caldera -hay que reconocerlo- intentaron darle un empujoncito a la idea de las tarjetas inteligentes, se les informó que "los fondos se distribuyen de la manera en que se hace porque así es la ley" y, en honor a la verdad, todo el remolino de transacción está efectivamente incorporado en ésta. Era ilegal hacer la cosa eficientemente para los pobres.

El gobierno actual se enfrenta a los mismos obstáculos en su intento por vencer la pobreza y abatir la corrupción. Obviamente con buenas intenciones, está atrapado por los mismos incentivos y sistemas y se siente justificadamente frustrado. El Presidente a todas luces está furioso. Pero existe una respuesta, y la misma no proviene del petróleo, del dinero, de la OPEP, de las empresas, de los especuladores, de los recaudadores tributarios, ni del moralismo. Proviene del sentido común sobre la manera de cambiar el sistema para que sí funcione a favor de los pobres. Ha llegado la hora de ensayar una idea verdaderamente revolucionaria, pero ya probada, de luchar contra la pobreza y la corrupción: liberar el capital de los pobres. ☞

Michael Rowan

El autor es presidente de RamCo, una compañía del Reino Unido que ayuda a empresas eléctricas y de servicios públicos latinoamericanas a producir nuevos ingresos a partir de sus activos intangibles.
Correo electrónico: mrowan@ramco-ltd.com